

y ocho meses. Vistos los documentos presentados por el promovente, y por el Ayuntamiento al tiempo de su informe. La recusacion que del Juez 1º hizo el quejoso; el pedimento del C. Promotor fiscal; el alegato del mismo promovente; la sentencia del Juez 2º de Distrito y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente; y

Considerando: que la concesion hecha á la Empresa del ferro-carril urbano en el cabildo del 19 de Julio de 1870 importa un verdadero contrato que produjo obligaciones y derechos que no pueden desvirtuarse por uno de los contrayentes, sin el consentimiento del otro; con tanta mas razon, cuanto que con el acuerdo del mismo Cabildo en 26 de Abril del año próximo pasado de no aceptar la devolucion que de la concesion hacia la Empresa, ratificó la forma de contrato que hoy no reconoce: que si el Ayuntamiento cree tener algun derecho para no llevar adelante lo pactado, así como para considerar nula la concesion por falta de algunos requisitos legales, estos derechos los debe deducir ante los Tribunales y nunca usar de su autoridad en causa propia. Se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior que declaró, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Miguel Rufo, como concesionario ó representante de la Empresa del ferro-carril urbano, contra el acuerdo del Ayuntamiento de esta Ciudad, dictado en 25 de Agosto del presente año, por violarse con él las garantías consignadas en el artículo 16 constitucional.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Mº Altamirano.*—*Ignacio Ramírez.*—*Simon Guzman.*—*L.*

*Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*José Mª Lozano.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 29 de 1874.—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por el C. José Calva, en representacion del C. Matías Alzúa, contra el C. Recaudador de Guaymas, que le exige el pago de una cantidad de pesos.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Fiscal que suscribe, no puede menos que pedir favorablemente al quejoso D. Matías Alzúa, porque cree legales los fundamentos en que se apoya su solicitud. El derecho de quinto que ha establecido el Congreso del Estado, en su ley de clasificacion de rentas de 4 de Diciembre del año próximo pasado, lo hace sobre la exportacion de platas, para lo cual está prohibido imponer á los Estados, sino es previo el consentimiento del Congreso de la Union, el cual hasta ahora no lo ha tenido, (art. 112, frac. I de la Constitucion federal) y por consecuencia natural, infringiendo ese artículo, se le violan al quejoso las garantías que le otorga la Constitucion general en su art. 16.

No quedando otro recurso legal para desagraviarlo, que el que se resuelva el amparo tal y como se solicita.

Guaymas, Agosto 31 de 1874.—*Lic. J. Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Setiembre 1º de 1874.—*José Monteverde.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guaymas, Setiembre 1º de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por D. José Calva, como apoderado de D. Matías Alzúa, contra el Recaudador del derecho de quidto de éste puerto, que le exige el pago de quinientos once pesos treinta y tres centavos por el dos por ciento de ensaye, sobre veinticinco mil quinientos sesenta y seis pesos treinta y dos centavos, valor de veintinueve barras de plata pasta que introdujo en esta Ciudad y exportó para San Francisco, Alta California, en el vapor americano "Montana" el 14 de Agosto último, con la póliza núm. 8 de la Aduana marítima de éste puerto, dejando pagados en esta oficina los derechos de exportacion, acuñacion y ensaye que causaron las mencionadas barras. Visto el informe rendido por el Recaudador; lo alegado por las partes y el pedimento del C. Promotor fiscal, con todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando: 1º que el Recaudador del derecho de quinto, ó sea la autoridad del hecho reclamado, procede en virtud de la facultad que le dió el decreto de la Legislatura del Estado, de 4 de Diciembre de 1873, que impone el derecho del dos por ciento sobre el valor de la plata pasta que se ensaya en este puerto, para su exportacion.

2º que los Estados no pueden, sin el consentimiento del Congreso de la Union, legislar sobre el comercio marítimo ó exterior, ó lo que es lo mismo, alzar ó bajar los aranceles inponiendo derechos á las importaciones ó exportaciones.

3º que la plata pasta, conforme á las leyes fundamentales del país, ademas de otras consideraciones de derecho internacional, se considera y debe considerarse como una mercancía especialísima sujeta á leyes y condiciones tambien especiales.

4º: Que bajo este respecto ha estado y está sujeta en su produccion y exportacion á las leyes federales, lo cual es necesario en la República para no deslivelar el comercio

por las contribuciones que impusieran los Estados. Por lo mismo y con fundamento de los arts. 16, 72, frac. IX, 101, frac. I y III, 112, frac. I, de la Constitucion general de la República y de la ley de 20 de Enero de 1869; la Justicia de la Union ampara y protege á Don Matías Alzúa contra los procedimientos del C. Recaudador del derecho de quintos de este puerto, en el cobro que le hace de quinientos once pesos treinta y tres centavos, por derecho de ensaye de veintinueve barras de plata que exportó para San Francisco, Alta California, en el vapor americano "Montana" el 14 de Agosto último.

Hágase saber á las partes, publíquese este fallo en el periódico oficial del Estado y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revision.

El Juez 2º suplente de Distrito de Sonora definitivamente juzgando, así lo determinó y firmó con los de su asistencia.—*M. Campillo.*—Asistencia.—*P. del Rincon.*—Asistencia.—*P. A. Piña.*

Es copia que certifico. Guaymas, Setiembre 1º de 1874.—*M. Campillo.*—Asistencia.—*P. del Rincon.*—Asistencia.—*P. A. Piña.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 28 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. José Calva, en representacion de D. Matías Alzúa, ante el Juzgado de Distrito de Sonora, contra el C. Recaudador de dicho puerto, que le exige el pago de quinientos once pesos treinta y tres centavos por el 2% de ensaye sobre veinticinco mil quinientos sesenta y seis pesos treinta y dos centavos, valor de veintinueve barras de plata pasta que introdujo en Guaymas y exportó para San Francisco Alta California, en el vapor americano "Montana," en 14 de Agosto próximo pasado: vista la sentencia del Juez de Distrito con todas las demas constancias

que obran en autos, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia de 31 de Agosto último, pronunciada por el Juez de Distrito de Sonora, que dice: La Justicia de la Union ampara y protege á D. Matias Alzúa, contra los procedimientos del C. Recaudador del derecho del quinto de este puerto, en el cobro que le hace de quinientos once pesos treinta y tres centavos por derecho de ensayo de veintinueve barras de plata que exportó para San Francisco Alta California, en el vapor americano "Montaña," en 14 de Agosto último.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, Noviembre 4 de 1874. —*L. M. Aguilar, secretario.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por María Refugio Casillas, contra los procedimientos del Coronel del Batallon núm. 24, C. Ambrosio Candey, por violacion de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez:

Matia Refugio Casillas, por haber reclamado contra el acto en cuya virtud su hermano Pedro fué consignado al servicio de las armas, manifiesta: Que se le redujo á

TOMO VI.—PARTE II.

prision el dia 26 de Setiembre último, infringiéndose con tal procedimiento los arts. 19 y frac. 2º del 20 de la Constitucion federal.

Decretada la suspensión provisional del acto reclamado, el C. Coronel del Batallon núm. 24, en su respuesta del dia 29 del mes anterior y en su informe del dia 3 del corriente, niega la verdad de la causa que ha motivado la prision de la Casillas, segun el escrito de queja, agregando que aquella se dictó como providencia económica, á consecuencia de haberse extraviado del cuartel una frazada perteneciente á la 1ª compañía.

Suponiendo que el caso esté comprendido en el final del art. 2º de la ley de 15 de Setiembre de 1857, y que aun no se venciera el término de tres dias para decretar la prision, como no se tomó á la Casillas su declaración preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas que presija la ley, ni el cuartel es prision, cuando menos resulta que se infringió en su persona la garantía consignada en la 2ª parte del art. 20 constitucional antes citado; y por tanto, el Promotor concluye pidiendo se declare, que la Justicia de la Union ampara y protege á la quejosa por la detencion arbitraria que sufrió por orden del Gefe del Batallon núm. 24. —Zacatecas, Octubre 7 de 1874.—*Eduardo G. Pankhurst.*

*Segundo pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez:

El gefe militar que ordenó la detencion de María Refugio Casillas en el cuartel del Batallon núm. 24, no ha presentado prueba que demuestre ser cierto que la segunda sea responsable del extravío de la frazada que se dice falta en la 1ª compañía.

Tampoco se ha justificado el motivo por que el cuartel se convirtió en prision, en el supuesto de que se tratara de un delito militar, cuya circunstancia no dispensa del respeto que se debe á los derechos del hombre.